

RESOLUCION del Ayuntamiento de Orense referente a la oposición para proveer una plaza de Jefe de Negociado de esta Corporación.

En el «Boletín Oficial de la Provincia de Orense» de fecha 4 de los corrientes se inserta el anuncio para la provisión de una plaza de Jefe de Negociado del excelentísimo Ayuntamiento de Orense, mediante riguroso turno de antigüedad entre Oficiales Técnicos de dicho Ayuntamiento. Podrán tomar parte los Oficiales Técnicos en quienes concurren los requisitos exigidos en el artículo 234 del Reglamento de Funcionarios de Administración Local. Las instancias se presentarán en el Registro General del excelentísimo Ayuntamiento en los treinta días hábiles sucesivos al de la inserción del presente anuncio en el «Boletín Oficial del Estado».

Orense, 8 de febrero de 1974.—El Alcalde: 1360 F.

RESOLUCION del Ayuntamiento de Sabadell referente al concurso-oposición libre para proveer en propiedad una plaza de Oficial de la Escala Técnico-Administrativa.

En el «Boletín Oficial» de la provincia, número 33, de 7 de febrero de 1974, se publica convocatoria y bases para proveer en propiedad una plaza de Oficial de la Escala Técnico-Administrativa de este Ayuntamiento, mediante oposición libre, exigiéndose la posesión del título de Licenciado en Derecho o en Ciencias Políticas o Económicas, hallándose expuesto en el ayun-

plur de la convocatoria en el tablón de edictos de este Ayuntamiento.

La mencionada plaza está dotada anualmente con un sueldo base de 144.000 pesetas, más dos pagas extraordinarias de 12.000 pesetas cada una y demás emolumentos que resulten de la aplicación del Decreto-ley 7/1973, de 27 de julio, y sin perjuicio de los demás derechos que la Corporación acuerde y las leyes determinen.

El plazo de presentación de instancias es de treinta días hábiles a partir del siguiente al de la inserción de este extracto de la convocatoria en el «Boletín Oficial del Estado».

Sabadell, 8 de febrero de 1974.—El Alcalde, José Bartull Bonastre:—1.041 E.

RESOLUCION del Tribunal calificador del concurso para provisión en propiedad de una plaza de Arquitecto Jefe de Servicio de esta Corporación.

Por el presente, y de conformidad con lo establecido en el artículo 7.º de la Reglamentación para ingreso en la Administración Pública de 27 de junio de 1968, se señala el día 7 de marzo y hora de las diez, en la Casa Consistorial, como fecha para proceder al examen de las documentaciones presentadas por los aspirantes al concurso para provisión en propiedad de una plaza de Arquitecto Jefe de Servicio y formular la correspondiente propuesta.

Lleida, a 18 de febrero de 1974.—El Alcalde-Presidente:—1.238 A.

III. Otras disposiciones

PRESIDENCIA DEL GOBIERNO

RESOLUCION de la Subsecretaría de la Presidencia del Gobierno sobre cumplimiento de la sentencia que se cita.

Excmos. Sres.: De orden del excelentísimo señor Ministro, se publica para general conocimiento y cumplimiento en sus propios términos, el fallo de la sentencia dictada en fecha 29 de diciembre de 1973 por la Sala Quinta del Tribunal Supremo en el recurso contencioso-administrativo número 19.332, promovido por don Angel Abadía Hueto, sobre reconocimiento de servicios interinos, a efectos de trienios, en cuya parte dispositiva dice lo siguiente:

«Fallamos: Que con desestimación del recurso contencioso-administrativo interpuesto por don Angel Abadía Hueto, funcionario del Cuerpo General Auxiliar de la Administración Civil del Estado, en su propio nombre y derecho, contra la resolución presunta de la Presidencia del Gobierno desestimatoria, por aplicación de la doctrina del silencio administrativo, de la petición formulada por el recurrente sobre reconocimiento de servicios interinos, a efectos de trienios, declaramos que dicho acto administrativo presunto se halla ajustado al Ordenamiento jurídico aplicable, y, en su virtud, absolvemos de la demanda a la Administración, sin hacer expresa imposición a ninguna de las partes, de las costas del recurso.»

Lo que comunico a VV. EE.

Dios guarde a VV. EE.

Madrid, 1 de febrero de 1974.—El Subsecretario, José Manuel Romay Beccaría.

Excmos. Sres.:

RESOLUCION de la Subsecretaría de la Presidencia del Gobierno sobre cumplimiento de la sentencia que se cita.

Excmos. Sres.: De orden del excelentísimo señor Ministro, se publica para general conocimiento y cumplimiento en sus propios términos, el fallo de la sentencia dictada en fecha 13 de diciembre de 1973 por la Sala Quinta del Tribunal Supremo en el recurso contencioso-administrativo número 18.980, promovido por doña Geneveva Palacios Rodríguez, sobre cómputo de trienios, en cuya parte dispositiva dice lo siguiente:

«Fallamos: Que con desestimación del recurso contencioso-administrativo interpuesto por doña Geneveva Palacios Rodríguez, del Cuerpo General Administrativo de la Administración

Civil del Estado, en su propio nombre y derecho, contra el acto administrativo presunto de la Presidencia del Gobierno desestimatorio, por aplicación de la doctrina del silencio administrativo, de la petición que formuló sobre reconocimiento, a efectos de trienios, de servicios interinos, declaramos que dicho acto presunto se halla ajustado al Ordenamiento jurídico aplicable, y en su virtud, absolvemos de la demanda a la Administración, sin hacer expresa imposición a ninguna de las partes de las costas del recurso.»

Lo que comunico a VV. EE.

Dios guarde a VV. EE.

Madrid, 1 de febrero de 1974.—El Subsecretario, José Manuel Romay Beccaría.

Excmos. Sres.:

RESOLUCION de la Subsecretaría de la Presidencia del Gobierno sobre cumplimiento de la sentencia que se cita.

Excmos. Sres.: De Orden del excelentísimo señor Ministro se publica para general conocimiento y cumplimiento en sus propios términos el fallo de la sentencia dictada en fecha 14 de noviembre de 1973 por la Sala Quinta del Tribunal Supremo en el recurso contencioso-administrativo número 17.223, promovido por don Ramón Basurto Urbieto y otros, sobre asignación del coeficiente 23 en lugar del 17, en cuya parte dispositiva dice lo siguiente:

«Fallamos: Que debemos aclarar y declaramos:

1.º La caducidad de los recursos formulados por doña Blanca Fuertes Camara, doña Angela Guayo Urrutia, don Luis Lopez de Arce y Gómez, doña Avelina Pérez López, don Fernando Robledano de Andrés, doña Mercedes Iscoa Ibarrondo, doña Teófila Virsedo Yubero, doña María del Pilar Díaz Duque, don Gabriel Campos Martínez y doña Josefa Rodríguez Torres.

2.º La inadmisibilidad de los interpuestos por doña María del Carmen Aragón Pascual, doña María Díaz Campos, doña Magdalena García Gilman, don Alfonso Hernández García, doña Carmen Dalmau Ferrer, doña Marta Alvarez García, doña Carmen Aranda Aguado, doña Sara García Clement, doña Ana María Jiménez Azabre, doña María Victoria Lorente Toribio, doña María del Carmen Moreno Caballero, don Eduardo Moreno Garrido y doña Carmen Vera Mateo.

3.º La desestimación de los recursos deducidos por don Ramón Basurto Urbieto, don Antonio Agulló de Luna, doña María Juana Alomá Arceyo, doña María Cabeza Fernández, doña Valentín Cuevas Cortés, doña María Corrales Marín, don José Cuevas Rodríguez, doña Angela Díaz Saez, doña Pilar Fernández López, doña Angela Gómez González, doña María Concepción

González Vallejo, doña Vicenta Hernán García, doña María del Carmen Méndez Guerra, doña María Muñoz Jiménez, doña Celia Ormaechea León, doña María Angeles Reina Morales, doña Angela Rojo Sebastián, don Victoriano Ruiz Velasco, don Fernando Ruiz Villagrasa, doña Sofía Consuelo Sánchez Díaz, don José Sánchez Fernández, doña Isabel de Sancho Martín, doña María Encarnación Saura Martínez, doña Pilar Tejedor Bonilla, doña Asunción Tenreiro Calvo, doña Aurora de Frias Barrada, doña Elisa España Gaztambide, doña María del Pilar Méndez Guerra, doña María Teresa Llamusi Calonge y doña María del Carmen Seijas Vázquez, contra las resoluciones de la Presidencia del Gobierno que denegaron sus peticiones de revisión del coeficiente que les había sido asignado; acuerdos que declaramos válidos y subsistentes, por ser conformes a derecho; sin costas.

Lo que comunico a VV. EE.

Dios guarde a VV. EE.

Madrid, 1 de febrero de 1974.—El Subsecretario, José Manuel Romay Beccaria.

Excmos. Sres. ...

MINISTERIO DE JUSTICIA

ORDEN de 30 de enero de 1974 sobre el Registro Civil único de Orense.

Ilmos. Sres.: De acuerdo con una de las fórmulas ofrecidas por el artículo 44 del Reglamento del Registro Civil, reformado por Decreto 1138/1969, se ha establecido ya en diferentes poblaciones un Registro Civil único a cargo de un solo Juzgado Municipal, combinado con un adecuado reparto con el otro Juzgado de los demás asuntos de su mutua competencia.

Este mismo sistema se extiende ahora a Orense, y teniendo en cuenta la experiencia ya acumulada, procede dar al nuevo régimen carácter definitivo, conforme a lo especialmente previsto en el artículo 44 del Reglamento antes mencionado.

En su virtud, este Ministerio, a propuesta, en la esfera de sus respectivas competencias, de las Direcciones Generales de Justicia y de los Registros y del Notariado, con informes de las Salas de gobierno del Tribunal Supremo y de la Audiencia Territorial de La Coruña, ha tenido a bien ordenar:

Artículo 1.º En el término municipal de Orense, el Registro Civil será único. Todas las funciones relativas al Registro correspondrán al Juzgado Municipal número 1 y, en su grado, al Juzgado de Primera Instancia número 1.

Art. 2.º Correspondrán igualmente al Juzgado Municipal número 1:

- La tramitación y resolución de los actos a que se refiere el artículo 17 de la Ley del Registro Civil.
- El cumplimiento de las funciones propias del Decanato, particularmente el reparto de los asuntos civiles y penales y la legalización de libros de comercio.

Art. 3.º Los actos de conciliación y los juicios civiles correspondrán, en el régimen de reparto actualmente aprobado, a ambos Juzgados Municipales y de Primera Instancia. En cuanto a los juicios penales, serán repartidos por igual entre los dos Juzgados, siguiendo el turno de guardias semanales.

Art. 4.º La tramitación y resolución de los asuntos gubernativos y de jurisdicción voluntaria no comprendidos en el artículo 2.º, así como de otros cualesquiera de naturaleza indeterminada, quedarán encomendados, en su respectivo grado, al Juzgado Municipal número 2 y al de Primera Instancia de igual número.

Disposición adicional

Corresponderá al Presidente de la Audiencia Territorial tomar las medidas oportunas para la puesta en marcha del nuevo sistema, singularmente adscribir los Oficiales, Auxiliares y Agentes necesarios al Registro Civil.

Lo que digo a VV. II. para su conocimiento y demás efectos.

Dios guarde a VV. II. muchos años

Madrid, 30 de enero de 1974.

RUIZ-JARABO

Ilmos. Sres. Directores generales de Justicia y de los Registros y del Notariado.

RESOLUCION de la Dirección General de los Registros y del Notariado en el recurso gubernativo interpuesto por el Procurador don Narciso Ranera Cahis en representación de don Luis Valls Puig y su esposa, contra calificación del Registrador de la Propiedad de Tarrasa.

Excmo. Sr.: En el recurso gubernativo interpuesto por el Procurador don Narciso Ranera Cahis en representación de don Luis Valls Puig y su esposa, contra la negativa del Registra-

dor de la Propiedad de Tarrasa a inscribir una escritura de compraventa, pendiente en este Centro en virtud de apelación del funcionario calificador;

Resultando que por escritura otorgada en Tarrasa el 30 de diciembre de 1969 ante el Notario don José Gabriel Erdozain Gaztelu, los conyuges don Luis Valls Puig, su esposa y una hija de ambos compraron a la Sociedad «Humet Hormafos, S. A.», representada por don Esteban Humet Palé un «solar edificable» en Tarrasa con frente a la calle 9-F, que ocupa una superficie de 1.207 metros y 45 decímetros; linda al Norte con la calle Hockey, al Este con la parcela que fue segregada y vendida a los compradores, al Oeste con otra manzana procedente también de la misma finca matriz y vendida a la Compañía mercantil «Inpe, S. A.», con la calle 9-F, en medio y al Sur con la calle 2-F.

Resultando que presentada en el Registro primera copia de la anterior escritura fué calificada con nota del tenor literal siguiente: «Suspendida la inscripción que se interesa en el precedente documento, por el defecto subsanable de la falta de claridad que atañe a la referencia de la Compañía vendedora y a la identidad de la finca, tomándose en su lugar anotación de suspensión por el término de sesenta días, en el tomo 1.558, libro 412, de Tarrasa, sección 2.ª, folio 28, finca 23.059, anotación letra A».

Resultando que el nombrado Procurador en la representación que ostentaba, interpuso recurso gubernativo contra la anterior calificación y alegó: que el representante de la Sociedad vendedora fué nombrado Administrador de la misma en una Junta General de 18 de abril de 1958; que tal acuerdo se inscribió en el Registro mercantil; que el citado Administrador fué renovado en su cargo por Junta General Extraordinaria celebrada el 23 de diciembre de 1969; que para la convocatoria de dicha Junta General se observaron todos los requisitos legales establecidos; que al otorgar el documento público calificado tuvo a la vista, según se hace constar en el mismo, el libro de actas de la Sociedad; que en la propia escritura se transcribieron los acuerdos que facultan al señor Humet para firmar, así como los datos más importantes y concretos de la Sociedad vendedora; que en cuanto a la identidad de la finca, resulta del propio documento calificado y de los libros del Registro y para mayor claridad acompaña un plano de situación en el que se señala la misma; y que, como fundamentos de derecho citaba los artículos 18, 19 y 66 de la Ley Hipotecaria y 112 y siguientes de su Reglamento;

Resultando que el Registrador informó: que en la escritura no se consignaba si la renovación del Administrador en su cargo fué o no inscrita en el Registro Mercantil ni por quién aparece autorizada el acta correspondiente a la misma; que tampoco se legitiman las firmas de quienes aparecen suscribiendo el acta ni las diligencias de apertura del libro que garanticen su autenticidad; que no se acompañó la escritura de constitución de la Sociedad ni las de las sucesivas modificaciones de la misma; que no se insertan los estatutos en la parte pertinente para poder apreciar la capacidad de los Administradores; que no se consignan el resto de los acuerdos tomados en la Junta General sin afirmarse por el Notario autorizante si en lo omitido hay algo que modifique o restrinja lo que se inserta; que las anteriores omisiones constituyen la falta de claridad señaladas en la nota en cuanto a la representación de la Sociedad, que impide calificar debidamente si se ostenta o no la representación de la Sociedad y si el Administrador está o no facultado para el acto que realiza; que en cuanto al segundo defecto concurren las mismas omisiones señaladas en el primero relativas a la autenticidad de la Junta en que se dice fué tomado el acuerdo de la venta más otras que señalará referentes a la propia finca; que el acuerdo de enajenación testimoniado en la escritura dice literalmente que «se procederá a la enajenación de la denominada "Fabrica Nueva", sita en la calle José Tapiolas, número 129. Igualmente se procederá con el resto del terreno correspondiente a la manzana contigua que quedaron tras la venta del solar hecha a don Luis Valls Puig y otros en 9 de mayo de 1967; que comparando esta descripción con la que se hace del terreno vendido no resulta que sea la misma finca sin tener a la vista la escritura de 9 de mayo de 1967; que en el acta no se dice la cabida de lo que se autoriza a vender ni se expresa su situación y linderos, aunque si se dice que el precio será el inventariado, sin especificar de qué inventario se trata ni acompañarlo a la escritura calificada, circunstancias todas que por su falta de claridad impiden calificar si el Administrador de la Sociedad vendedora, en el caso de que acreditase tal representación, estaba o no autorizado para vender como ha hecho la finca citada; que la fotocopia que se acompaña del plano de situación no está diligenciada por lo que carece de autenticidad y además, como reconoce el recurrente, no pudo ser tenida en cuenta al no acompañarse inicialmente al documento calificado; que si en el acta en que se autorizaba la venta se hubiese consignado al menos el número de la finca matriz, podía haberse identificado la que se enajenaba, pero no se hizo así; que también podría ayudar a identificarla la presentación de la escritura de 9 de mayo de 1967; que el estado de quiebra de la Sociedad vendedora no supone obstáculo a la necesaria aclaración, pues siempre existen órganos que representan a la Sociedad; y que, como fundamentos de derecho señala los artículos 18 de la Ley Hipotecaria y 117 de su Reglamento así como las Resoluciones de 30 de julio de 1917, 18 de mayo de 1933 y 15 de julio de 1971;